

¿Una esperanza para El Salvador?

José Z. García

***E**n el panorama de guerra civil que desde hace más de siete años desangra a El Salvador, han vuelto a cobrar importancia los movimientos laborales democráticos, protagonistas esenciales en los inicios del conflicto. Este regreso a los orígenes de la guerra y a sus causas de base podría ser, en opinión del autor del artículo publicado a continuación¹, una señal alentadora si con ello se amplía el espacio político para una eventual reincorporación de la guerrilla al mundo civil, y se desinternacionaliza esa compleja estructura de violencia que en gran medida subsiste debido a los apoyos financieros recibidos del exterior.*

* * *

DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, LAS FUERZAS ARMADAS de El Salvador, con asistencia creciente por parte de los Estados Unidos, han ido progresando en su lucha contra la guerrilla. Cuentan con más de 40.000 efectivos, la fuerza aérea proporciona ahora rápida movilización y apoyo a las tropas, y las operaciones tácticas del ejército, así como la capacidad de los servicios de inteligencia y el adiestramiento militar, han mejorado considerablemente, todo lo cual ha obligado a la guerrilla a moverse en unidades de apenas una docena de miembros o menos. El número de combatientes guerrilleros se redujo de 12.000 en 1984 a menos de 6.000 en 1986². Durante la mayor parte del año 86, las fuerzas armadas se comprometieron en una larga serie de operaciones que aseguraron el área localizada alrededor del volcán Guazapa, durante bastante tiempo símbolo de la resistencia rebelde, y situado a tan solo 30 kilómetros de la ciudad capital de San Salvador. Con la conquista de Guazapa, el territorio controlado por los rebeldes —que hace dos años totalizaba el 30 por ciento de El Salvador— se redujo a aproximadamente el 10 por ciento del país.

La cooperación entre militares y civiles también ha mejorado en la zona de guerra. El programa combinado de defensa y acción civil ya ha sido puesto en marcha en algunas de las áreas recientemente recuperadas al control guerrillero. El programa está concebido para crear apoyo al gobierno y para restringir el movimiento guerrillero dentro de la población local. A los voluntarios se les entrena en tácticas de defensa y se les suministra armas y radios para protegerse contra posibles ataques guerrilleros. Una vez que el ejército se ha asegurado el área y se ha organizado y entrenado en instalaciones militares una unidad de auto-defensa, se envían trabajadores de los

II TRIMESTRE 1987

diversos ministerios para proporcionar y restaurar servicios gubernamentales tales como acueductos, comunicaciones, mantenimiento vial y atención médica. Si bien el programa se ha visto retrasado y los resultados aún son precarios y desiguales (la coordinación ministerial aún es deficiente y algunos comandantes militares suspicaces a veces desalientan la defensa civil), la penetración del gobierno civil en las zonas de conflicto es mayor de lo que ha sido en varios años. De resultar exitoso, el programa seguramente contribuirá a restringir la movilización guerrillera en el país.

La adversidad militar ha sido la causa de que la guerrilla evite dentro de lo posible confrontaciones con las fuerzas armadas: el contacto entre los dos ejércitos ha declinado a pesar de observarse una mayor actividad por parte de las tropas gubernamentales, y las víctimas semanales de lado y lado contabilizan un promedio de 24¹. La guerrilla se concentra ahora en continuar su ataque prolongado contra el sistema económico del país. Este cambio en las tácticas operacionales parece responder a una estrategia guerrillera orientada a explotar las debilidades crecientes en la base de apoyo del gobierno, a aumentar el respaldo a la guerrilla dentro de las clases trabajadoras urbanas, y a crear un espacio político potencial para los rebeldes en cuanto finalice la guerra civil. Todo este esfuerzo está dirigido hacia el movimiento laboral.

El movimiento laboral

NO DEBE PERDERSE DE VISTA EL HECHO DE QUE LA guerra civil comenzó cuando un extraordinario resurgimiento en el movimiento laboral a finales de los años 70 fue repelido por acciones paramilitares contra los líderes sindicales y sus aliados. Los trabajadores de los sectores urbano y rural — organizados por líderes radicales y moderados— empezaron a reclamar una mayor porción de los ingresos generados por los entonces altos precios internacionales del café, fuente principal de divisas de El Salvador. Estos reclamos fueron rechazados por fuerzas de derecha. Unidades paramilitares controladas por el gobierno comenzaron a asesinar o a intimidar a dirigentes laborales y a quienes les apoyaban, incluyendo a políticos prominentes de la clase media y a miembros del clero. Cuando algunos sectores de la Iglesia Católica y la mayor parte de la comunidad internacional, incluyendo al presidente Carter de los Estados Unidos, repudiaron las tácticas utilizadas por la extrema derecha y el gobierno que las apoyaba, las fuerzas militares intervinieron, el 15 de octubre de 1979, en un esfuerzo por crear una coalición gobernante más flexible. Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde para impedir la deserción de la Democracia Cristiana y de otros partidos de la clase media. Con comandantes guerrilleros marxistas y un apoyo internacional de magnitudes considerables, la oposición se comprometió en una guerra civil total contra el gobierno.

1/ Current History, Vol. 85, No. 515.

2/ Julia Preston, "Part of El Salvador Finds Peace", *Washington Post*, julio 31, 1986.

3/ Foreign Broadcast Information Service, *Daily Report: Latin America*, "Coprefa Communique Reports August Activities", septiembre 5, 1986, p. 11.

Durante varios años, la guerra civil hizo que le fuera difícil reagruparse a los activistas sindicales, con frecuencia inclusive a pesar de los esfuerzos respaldados por Estados Unidos para ayudar a la creación de un sector laboral organizado de tendencia moderada. El encargado del programa de reforma agraria de El Salvador y dos ciudadanos norteamericanos que trabajaban para el *American Institute for Free Labor Development* (AIFLD), una organización laboral vinculada con la AFL-CIO y con el gobierno de Estados Unidos, fueron asesinados por un escuadrón de la muerte de extrema derecha en el Hotel Sheraton de San Salvador. El asesinato de líderes sindicales a quienes se les sospechaban vínculos con las guerrillas no cesó hasta que la mayor parte de los más militantes estaban muertos, exiliados o encarcelados. Aún en 1983, una ola de asesinatos de activistas laborales por parte de elementos de la derecha hizo que muchos legisladores norteamericanos cuestionaran los esfuerzos que hacía su país para apoyar al gobierno salvadoreño, el cual parecía incapaz de controlar la violencia.

No obstante, el gobierno de El Salvador fue adquiriendo gradualmente control sobre la situación a través de elecciones, reformas domésticas, asistencia económica y militar estadounidense y escrutinio internacional con respecto a los abusos cometidos contra los derechos humanos. El sector laboral comenzó a resurgir, especialmente después de la elección presidencial de José Napoleón Duarte en 1984, cuyo triunfo se debió en parte apreciable al respaldo de importantes segmentos del trabajo organizado. Sin embargo, para cuando fue elegido Duarte, los estragos de la guerra civil habían reducido el producto interno bruto en un 25%; la competencia por obtener favores gubernamentales empezó a manifestarse entre los trabajadores, cuyos salarios disminuyeron en algunos sectores hasta en un 50%, y entre los inversionistas (muchos de los cuales siempre se habían mostrado recelosos frente al programa social de Duarte), quienes querían garantías de que podían invertir con alguna esperanza de obtener ganancias.

Durante los primeros meses de su gestión, Duarte hizo lo posible por convencer a los dirigentes empresariales del país de que él no representaba una amenaza seria para sus intereses. Al mismo tiempo, logró aplacar los sentimientos de los asalariados mediante la expansión del sector gubernamental, lo cual significaba empleos para los cesantes. Sin embargo, un año después de su elección Duarte ya se encontraba bajo presión creciente, tanto del sector empresarial como de los sindicatos.

La crisis financiera de 1986

EN ENERO DE 1986, UNA CRISIS FINANCIERA MARCADA por una inflación del 31% en los precios por encima del año anterior, un significativo aumento del déficit de la balanza de pagos, un ligero descenso (a aproximadamente 1.5%) en la tasa de crecimiento económico, y un índice de desempleo estimado en más del 30%, obligó al gobierno a adoptar medidas de austeridad. Estas incluyeron una devaluación del 100% de la moneda, un aumento en los impuestos a la gasolina, restricciones a la expansión burocrática y dismi-

nación de importaciones. La mayor parte de los analistas coincidían en señalar a los asalariados como el sector más afectado por estas medidas.

Al propio tiempo, el sector empresarial decía estar excesivamente presionado. Los caficultores protestaron enérgicamente contra las políticas confiscatorias del Instituto Nacional del Café (INCAFE), el monopolio estatal orientado hacia la comercialización internacional del grano. Si bien el gobierno estaba pagando a los caficultores solo US\$80 por quintal, en enero de 1986 los precios en la bolsa de Nueva York eran de aproximadamente US\$250 por quintal, debido en gran parte a las heladas que por entonces afectaron los cultivos del Brasil. El gobierno se estaba quedando con la diferencia y, como medida complementaria, estaba agregando un impuesto del 15% sobre las ganancias de los productores.

Eran predecibles algunas críticas. El aumento en los impuestos al sector caficultor privado formaba parte de una estrategia global tendiente a redistribuir parte de la riqueza, altamente concentrada, buscando llegar a las clases medias y bajas. Las políticas confiscatorias de este tipo buscaban también reducir el poder político de las fuerzas de derecha, concentradas en la agroindustria, las cuales han resistido tradicionalmente cualquier expansión en el papel del gobierno y no se han detenido con miramientos para poder conservar sus privilegios.

El paquete de austeridad anunciado por Duarte exacerbó las tensiones en el movimiento laboral y contribuyó a alejar a los sindicatos del control de los partidos moderados. La austeridad puso fin al periodo de gracia que le había otorgado a Duarte el sector laboral y le abrió las puertas a una mayor militancia de los sindicalistas de izquierda, cada vez más activos en la atmósfera relativamente libre. Los sindicatos disgustados con el programa de austeridad se unieron a una federación izquierdista recién organizada, la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), retirándose de la federación más moderada controlada por el partido Demócrata Cristiano, el cual hasta entonces había dominado tradicionalmente el sector laboral. El 22 de febrero de 1986, varios miles de miembros de la UNTS organizaron una marcha de protesta pacífica contra las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno. Como respuesta, el partido Demócrata Cristiano, ayudado por varias organizaciones sindicales internacionales incluyendo la AIFLD, rápidamente organizó una nueva federación con los grupos sindicales que aún le eran fieles. El partido y la nueva federación unieron sus fuerzas en marzo en señal de solidaridad con las propuestas de Duarte⁴.

Los dirigentes sindicales militantes, cuyos reclamos fueron apoyados ostentosamente por la guerrilla en enero del año pasado, han ejercido fuerte presión sobre Duarte para que sostenga conversaciones de paz con los rebeldes. Arguyen que la guerra civil es responsable de la situación en que se encuentra el gobierno, el cual se está viendo obligado a escoger entre las necesidades de la comunidad empresarial y los requerimientos de la comunidad laboral. En su opinión, los ataques guerrilleros compelen al gobierno a

4/ Véase Norman Casper, "El IADSL y la corrupción del movimiento sindical en El Salvador", *Estudios Centroamericanos*, No. 449 (marzo, 1986). Véase también Marjorie Miller, "Thousands of Salvadorans March to Protest Duarte's Economic Austerity", *Los Angeles Times*, febrero 22, 1986.

gastar una proporción cada vez mayor de su presupuesto en el esfuerzo de la guerra. Las fuerzas armadas están recibiendo el 40% del presupuesto nacional. Pero los gastos militares no generan muchos empleos nuevos y reducen el monto de dinero que podría utilizarse para programas sociales como vivienda, salud y obras públicas, todos los cuales son intensivos en trabajo.

Hasta que termine la guerra, sostienen los dirigentes sindicales, el conflicto generado entre las clases por el uso de unos recursos escasos irá en aumento. La única solución es la paz. Este tipo de razonamiento encuentra cada vez más adeptos, inclusive dentro de los sindicatos más conservadores que están a favor del gobierno, y es probable que continuará ganando simpatías. El poder político del movimiento laboral es considerable; cuando Duarte anunció su iniciativa de sostener conversaciones de paz en junio, estaba respondiendo a presiones de dicho sector.

Por su parte, es posible que la guerrilla haya querido evitar las conversaciones por lo menos hasta ver si las presiones sindicales sobre Duarte aumentan. Si bien el movimiento guerrillero se ha reducido, los rebeldes aún conservan suficiente fuerza y la mayor parte de los analistas consideran que, como van las cosas, la situación podría prolongarse indefinidamente.

Los ataques guerrilleros provocaron daños estimados en US\$200 millones a las cosechas en el año 1985⁵. La guerrilla aseguró haber destruido 8 millones de libras de café y 12 procesadoras ese año. En enero de 1986, la guerrilla destruyó cuatro procesadoras, quemó un banco y causó otros daños en el departamento cafetero de Sonsonate. Tan solo en ese mes, los daños provocados al sistema eléctrico de la nación fueron tan costosos como los producidos durante los cuatro años anteriores a 1986⁶.

Las organizaciones guerrilleras agrupadas bajo el FMLN-FDR⁷, tal vez alentadas por la evidencia creciente de que Duarte había perdido parte de su base política, aparentemente duraron parte del año discutiendo los nuevos desarrollos y formulando posiciones para posibles conversaciones futuras con el gobierno. En un sorprendente artículo firmado por el comandante Joaquín Villalobos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el autor sostenía que la guerrilla estaba ganando la guerra desde el punto de vista militar, aunque la mayor parte de la evidencia presentada era de naturaleza estrictamente política. Con un poco más de realismo, un grupo de intelectuales de la Universidad Católica, simpatizantes con algunas de las metas del FMLN-FDR, insistió en la necesidad de una solución negociada para terminar la guerra civil; criticaron tanto a Duarte como a Estados Unidos por lo que consideraban una política dirigida a lograr una solución puramente militar⁸.

Si bien la guerrilla goza de un nuevo espacio político con el resurgimiento de las reivindicaciones laborales, el efecto a largo plazo de tales

5/ James LeMoyné, "Salvador Rebels Have Learned to Dodge Bullets", *The New York Times*, enero 5, 1986.

6/ Marjorie Miller, "El Salvador: No End in Sight to War", *Los Angeles Times*, enero 10, 1986.

7/ Los aproximadamente 20 grupos guerrilleros están nominalmente unidos como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); el brazo político del frente es el Frente Democrático Revolucionario (FDR).

8/ Véase Joaquín Villalobos, "El estado actual de la guerra y sus perspectivas", *Estudios Centroamericanos*, op. cit.; e Ignacio Ellacuría, "Repertorio de soluciones para los problemas de El Salvador", *ibid.*, enero-febrero, 1986.

reivindicaciones sobre el poder del gobierno no debe exagerarse. Las disputas laborales seguramente no afectarán los vínculos entre Duarte y las fuerzas armadas, aún si sus miembros son, en su mayor parte, mucho más conservadores que el Presidente e, inclusive, si a veces se muestran hostiles frente a él. No obstante, el control ejercido por Duarte sobre la jerarquía militar parece ser bastante fuerte. Una prueba de ello se dio durante las negociaciones que condujeron a la liberación de la hija de Duarte, quien había sido capturada por la guerrilla en septiembre de 1985. El coronel Sigfredo Ochoa, comandante de la muy importante Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango, firmó una carta en donde denunciaba los términos de su liberación a cambio de varias decenas de guerrilleros encarcelados. Más tarde, él y otros comandantes de tropa se rehusaron a acatar la aceptación de Duarte de una propuesta de la guerrilla para pactar una tregua durante la navidad⁹.

El hecho de que Duarte hubiera podido remover a Ochoa de su cargo y enviarlo como agregado militar a Washington sin enfrentar seria oposición por parte de las fuerzas armadas es un paso adelante en la consolidación de su control sobre los oficiales recalcitrantes. El apoyo que siga dándole Estados Unidos a la guerra probablemente dependerá de la subordinación militar al poder civil.

En 1985, las elecciones legislativas le dieron al partido Demócrata Cristiano de Duarte 33 de los 60 escaños, lo que le significa al presidente una mayoría absoluta que le facilita la conversión de sus programas en leyes. Este es un cambio significativo desde los días en que los partidos de derecha, entonces dominantes dentro del congreso, promovían la inacción legislativa. De otra parte, el gobierno cuenta con el suministro de cuantiosa asistencia externa, no solo por parte del gobierno norteamericano, sino también de numerosas agencias internacionales, partidos y países. A medida que disminuye la violencia auspiciada por la extrema derecha, el gobierno salvadoreño es objeto de cada vez menos ataques por parte de los grupos defensores de los derechos humanos.

Persisten, sin embargo, serios problemas. Los críticos señalan el fracaso del gobierno en sus propósitos de lanzar una campaña de alfabetización a nivel nacional, de tomar medidas adecuadas para aliviar la suerte de los miles de refugiados víctimas de la guerra, y de encontrar soluciones viables al enorme problema del desempleo¹⁰. La corrupción está aparentemente muy difundida. De otra parte, el descubrimiento de una red de secuestradores en marzo de 1986, supuestamente organizada por oficiales de las fuerzas armadas, subrayó la fragilidad del sistema judicial de la nación. El asunto comprometía a un mayor del ejército, cuyos compañeros de la academia militar ocupan actualmente cargos claves en las fuerzas armadas. En la historia salvadoreña, ningún oficial ha sido juzgado en un tribunal civil por un crimen serio. Por tanto, existe un escepticismo generalizado en cuanto a la capacidad del sistema judicial de actuar con la eficacia requerida.

Duarte también debe demostrar que puede tratar eficazmente con las centrales de trabajadores. El partido cristianodemócrata ha intentado, con

algún éxito, ganarse el apoyo de segmentos importantes del movimiento laboral, pero los miembros de los sindicatos consideran que Duarte no les ha retribuido el apoyo brindado tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas. Ello pone de manifiesto una falla en las relaciones de Duarte con el movimiento sindical, ya que el presidente tiene fama de utilizarlo a su antojo según las necesidades del momento.

El FMLN-FDR

LA GUERRILLA, A SU VEZ, HA TENIDO BASTANTES problemas. Pese a los esfuerzos realizados en 1985, aparentemente no logró crear un partido político unificado. Sus facciones encuentran todavía motivos de desunión en diferencias ideológicas y en cuestiones de menor importancia. Las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN), cuya base en Guazapa fue eliminada por el gobierno en 1986, es la más cercana al movimiento laboral y tal vez a la Iglesia; el ERP, pese a ser el grupo más fuerte desde el punto de vista militar, es el que menos probabilidades tiene de comprometerse en un esfuerzo electoral serio al finalizar la guerra. Si bien Jorge Shafik Handal, dirigente del Partido Comunista, tiene mayor acceso a las fuentes de financiamiento internacionales, los líderes de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) en Chalatenango están más cerca de las necesidades de la población rural. Estas diferencias hacen difícil la toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a escoger opciones militares o políticas.

Existen diferencias aún mayores entre el FMLN y sus aliados políticos, el más moderado FDR. El año pasado, el FDR repudió el secuestro guerrillero de varios alcaldes democristianos, así como el secuestro de la hija de Duarte. Tal vez aburridos con su vida seminómada en el extranjero, varios miembros del FDR ya han regresado calladamente al país, esperando encontrar algún espacio en el escenario político actual. Quienes aún permanecen en el exterior corren ahora el peligro de ser percibidos como miembros de otro más de los varios movimientos políticos fracasados en el exilio.

El Salvador se está convirtiendo rápidamente en un caso de estudio de guerras de baja intensidad. No debe olvidarse que la naturaleza y la persistencia de la guerra se debe, por lo menos en parte, a la estructura peculiar de la financiación internacional y a otras formas de apoyo al esfuerzo de la guerra. Cada actor doméstico del conflicto —el gobierno, la Iglesia, las fuerzas de la derecha, la guerrilla izquierdista del FMLN y sus aliados más moderados del FDR, los sindicatos y las innumerables víctimas vivas de la guerra— ha recibido asistencia de grupos simpatizantes en el exterior: gobiernos, partidos políticos, feligreses donantes, agencias de alivio, ciudadanos privados, escritores, soldados de fortuna, sindicatos, y muchas organizaciones más. Cada uno de estos grupos ha tratado de resolver algunos de los problemas ocasionados por la guerra civil, pero la mayor parte de ellos tiene ideas emotivas que reflejan los puntos de vista estrechos de aquellos a quienes ayudan.

Las consecuencias no intencionales de estos esfuerzos no coordinados ha sido la internacionalización de una estructura de violencia cada vez más complicada, lo cual, desde luego, no ha contribuido a lograr la paz.

9 / Dennis Volman, "Support for Duarte Crumbling", *Christian Science Monitor*, diciembre 30, 1985.
10 / James LeMoine, "Duarte's Critics on the Rise at Home", *The New York Times*, febrero 10, 1986.

Es irrealista esperar que muchos de esos grupos puedan comprometerse en un esfuerzo no formal de “baja intensidad” para romper el actual impase; no obstante, no se puede menos que señalar como, luego de siete años de guerra civil, todos los grupos, por bien intencionados que sean, tienen alguna responsabilidad en la prolongación del conflicto.

Si existe alguna luz de esperanza para El Salvador en el futuro cercano, ésta se halla en las actividades del movimiento laboral. Este tiene hondas raíces nacionales. De hecho, la guerra misma tuvo sus orígenes en el movimiento laboral; los derechos humanos y otros temas políticos, en gran parte definidos y articulados por grupos foráneos, han tendido a oscurecer las causas de base de los abusos cometidos, que se encuentran en la compleja red de las relaciones obrero-patronales en la economía cafetera de El Salvador. Es señal alentadora ver que, a medida que la guerra civil se desgasta cada vez más, el conflicto está regresando a sus orígenes.

La dinámica dentro del campo laboral ofrece una posible base para alcanzar una paz permanente en la medida en que demuestre que la guerrilla podría encontrar allí un lugar adecuado para trabajar en una sociedad de posguerra. Los grupos moderados y radicales que hoy en día conforman el FMLN-FDR lucharon y murieron por el derecho de los campesinos y de los obreros de tener una representación seria dentro del sistema político. El movimiento laboral es su circunscripción natural y si acuerdan deponer las armas a cambio de garantías de que pueden competir justamente por obtener la lealtad política de los sindicalistas, es posible que pueda estructurarse una base real para una paz duradera. Después de todo, aún un movimiento laboral contestatario es preferible a tener una guerra civil crónica financiada en el exterior.

Si el análisis parece pecar de optimista, al menos en algo hay motivos para guardar alguna esperanza: hace diez años, los asuntos laborales se resolvían mediante asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte, represalias guerrilleras y, finalmente, guerra civil. Ahora, los problemas de este tipo se canalizan de manera menos violenta, más institucional y burocrática. La reintegración nacional puede estar comenzando a pesar de todo.